

# BOLONIA: LA POLÉMICA REFORMA UNIVERSITARIA A DEBATE

En 1999, los ministros de Educación europeos firmaron en Bolonia una declaración que daba inicio al proceso de convergencia de los estudios universitarios en Europa y que llevaría aparejada otra serie de transformaciones, tachadas de mercantilización y privatización por los sectores más críticos. 2010 es la fecha tope para la implantación definitiva del nuevo sistema, pero ha sido ahora, estos últimos meses, cuando ha saltado a la luz pública la polémica entre defensores y detractores.

El movimiento de rechazo a Bolonia ha sacado a miles de estudiantes a la calle en toda Europa. En Zaragoza, las protestas incluyeron un encierro de más de 100 días en la Universidad, que terminó con una negociación de la asamblea de estudiantes con el rectorado, en la que ambos acercaron sus posturas. Según una encuesta realizada por la empresa Simple Lógica, un 27,2% de los españoles no apoya el Plan Bolonia, casi el doble de los que lo respaldan (13,9%). Además, un 48% consideran baja o nula la información que tienen sobre él. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) apoya, sin embargo, el proceso. A ambos, asamblea y rectorado, cedemos la palabra.

## A FAVOR...

**FERNANDO ZULAICA PALACIOS.** *Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UZ.  
Ex-presidente de la AVV Almazara y miembro de la AVV Puente Santiago.*

**D**urante los últimos meses ha saltado a los medios de comunicación y al debate ciudadano el llamado Plan Bolonia, esto es el proceso por el cual la Universidad española se va a adaptar al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que supone el reconocimiento de nuestras titulaciones y nuestros titulados y tituladas en un total de 46 países. Bienvenida sea esta circunstancia si ello nos ayuda a profundizar y dar a conocer las reformas que hemos emprendido en la universidad y que hasta la fecha estaban siendo debatidas en un entorno exclusivamente académico, aunque no por ello carente de intensidad: diez años de transmisión de la información, cientos de sesiones de trabajo sobre este tema, exposición pública de las propuestas y participación de todos los sectores en la toma de decisiones.

Son muchas las cuestiones que necesitaríamos abordar para dar cumplida respuesta a los interrogantes que se plantean desde fuera de la Universidad, pero, y por ceñirme a los límites de espacio, me voy a referir a solo uno de los elementos del debate: la privatización de las universidades. Cuestión que está generando una innecesaria alarma social.

La privatización de las universidades públicas es una de las principales críticas que desde distintos colectivos recibe el

proceso de Bolonia a la vez que se nos dice que el fin último de las reformas es convertir un servicio público en un producto más del sector privado, como el que prestan las universidades privadas. Nada más lejos de la realidad. Suponemos que este argumento no se basa en la existencia de universidades privadas en la enseñanza superior (anteriores al plan Bolonia), cuyo papel es residual tanto en lo que se refiere a estudiantes como a indicadores de docencia e investigación. Si por el contrario, las razones que se esgrimen son la introducción en las universi-

CAUSA SORPRESA QUE  
SE ENTIENDA COMO  
PRIVATIZACIÓN  
ENCUBIERTA PERSEGUIR  
LA MAYOR EFICIENCIA

dades públicas de la financiación por objetivos y la rendición de cuentas, causa sorpresa que se entienda como una privatización encubierta el perseguir la mayor eficiencia, concepto que desde la universidad lo entendemos como alcanzar los mejores resultados académicos e investigadores. No se entiende que alguien pueda pensar que no es bueno que nuestros estudiantes finalicen sus estudios en el tiempo previsto, que la selección del profesorado no se haga con el máximo rigor, que se implementen controles de calidad sobre la docencia que se imparte en las aulas así como que no mejoremos la empleabilidad de los titulados de nuestra universidad. No debemos confundir el término privatización con el objetivo de que nuestra universidad gestione eficazmente los recursos públicos.

No solo no es negativo sino que debemos recibirlo como un enfoque muy positivo. La universidad española ha vivido durante muchos años al margen de la sociedad que, no lo olvidemos, es quien la financia. Financiación que proviene de los impuestos que todos pagamos y con los que pretendemos construir el Estado de Bienestar. Hora era de que, con el más absoluto respeto a la autonomía universitaria, se rindieran cuentas de cómo se utilizan los fondos y de qué resultados se obtienen. Y la mejor forma de rendir cuentas no es mirándonos al ombligo y evaluándonos nosotros mismos. El procedimiento elegido ha sido el recurrir a evaluaciones externas a través del Consejo de Coordinación Universitaria, órgano dependiente del Ministerio, que es quien evalúa contando para ello con los informes emitidos por expertos académicos, sin que ninguna empresa y mucho menos ningún empleador a título personal, intervengan en decisiones que afectan a la reforma de nuestros planes de estudio. A las pruebas y a la realidad de nuestra universidad nos remitimos.

No es el momento de cansar con cifras y datos de las mejoras significativas que en los últimos años ha tenido nuestra universidad. Pero si no las citamos es porque tampoco queremos ser complacientes con nosotros mismos. No queremos que los datos escondan que aún estamos lejos de muchas cosas de las que necesita la universidad. Faltan por alcanzar niveles de inversión y de financiación comparables con los de otros países europeos que están por delante nuestro; es necesario disponer de una financiación pública suficiente para hacer frente a una enseñanza mucho más práctica; una financiación que exige contar con más profesorado, pero también la disponibilidad de más instalaciones y recursos didácticos. En otras palabras, no se puede ir a la Convergencia Europea si no convergemos también en este aspecto.

Y, sobre todo, hace falta cambiar la mentalidad de quienes ven en cada cambio un peligro. Bolonia no va a resolver ni los problemas de la universidad ni los de la sociedad, pero tampoco va a contribuir a agravarlos. Lo que sí es seguro es que esta oportunidad que se nos presenta nos permitirá, si se cumplen las premisas apuntadas, modernizar nuestra universidad.



MANIFESTACIÓN CONTRA BOLONIA  
EN ZARAGOZA, EL 12 DE MARZO

## EN CONTRA...

ASAMBLEA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD (ACPU)

Lo que se vislumbra en el fondo del proceso: un riesgo evidente de privatización de la gestión y de mercantilización de la universidad pública". Son palabras del manifiesto elaborado por un grupo de profesores de la Universidad de Zaragoza (UZ), y ya suscrito por casi un centenar de docentes. Pero, ¿no se supone que se trata de una "inocente" reforma metodológica, de una modernización "necesaria"? ¿Qué es, en realidad, Bolonia?

La Asamblea Contra la Privatización de la Universidad (ACPU) afirma que se trata de un proceso de reconversión estructural de la universidad de marcado corte neoliberal que parte de parámetros económicos establecidos por la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial a través de los Acuerdos Generales de Comercialización de Servicios, que promueven la conversión de derechos como la educación o la sanidad en servicios a "liberalizar" (léase "privatizar"). En el ámbito europeo, todo ello se plasma en una serie de declaraciones (Lisboa, Bolonia...), aunque sin carácter vinculante; los Estados tienen capacidad de maniobra puesto que la UE no tiene competencias en el terreno de la educación. La Comisión Europea declaró que

el Espacio Europeo de Educación Superior pretende crear "la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo"; el objetivo es copiar el modelo estadounidense para competir con él en el "mercado mundial de la educación".

El diseño estratégico del plan incluye: el recorte presupuestario al sistema público para disminuir sus medios y así "justificar" la (siempre falsa) mayor eficacia de la gestión privada; la penetración del capital privado para condicionar las líneas de investigación; la identificación perniciosa entre intereses "empresariales" y "sociales", que otorga al mercado laboral la capacidad absoluta para decidir lo que debe ser estudiado o no (el Consejo Social de la UZ está presidido por un ex directivo de OPEL, y el de la UNED por César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica SA; otro ejemplo son las 25 cátedras de empresa: Novartis, Mariano López Navarro... ya existentes en la UZ). Por último, la adopción de una metodología, un discurso y unas prácticas que constituyen otra vuelta de tuerca en la colonización del lenguaje y las formas empresariales en el ámbito educativo

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE >>



NEGOCIACIÓN ENTRE LA ACPY Y EL RECTORADO,  
QUE PUSO FIN AL ENCIERRO EN LA  
UNIVERSIDAD, EL 25 DE MARZO

<< VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

(“recursos humanos”, competencia en “espíritu emprendedor”, “flexibilidad”...). Es decir, se trata de formar trabajadores, consumidores y de convertir la educación en negocio en sí mismo.

En tan reducido espacio no podemos describir la devaluación que suponen los grados respecto a las licenciaturas, y que hace “conveniente” (imprescindible, de hecho, para abogados o ingenieros) cursar el máster correspondiente, a precios más altos; el CAP, curso necesario para ejercer la docencia, pasaría de 219 a 1.500 euros. Precio público significa “accesible a todos”, no “menor a las aberrantes cifras de los máster privados”.

Las becas, claro, no se suprimen de golpe, pero aparecen los préstamos-venta, es decir, hipotecas (¡como si no tuviéramos bastantes!) para afrontar gastos tan altos; los hijos de los trabajadores tendrían muchas más dificultades para estudiar.

Por todo ello, defendemos que esta supuesta reforma metodológica es, en realidad, una reforma económico-política

## SE TRATA DE FORMAR TRABAJADORES, CONSUMIDORES, Y CONVERTIR EDUCACIÓN EN NEGOCIO

que convierte a la universidad pública en una institución regida por criterios mercantilistas, que modifica su función social para someterla a los intereses del capital privado.

Pese a lo dicho desde rectorado y algunos medios informativos, en esta lucha no hemos estado solos. Además del citado manifiesto, hubo dos importantes manifestaciones (unas 1.000 personas en la primera y 2.500 en la segunda) en contra de Bolonia. En la del 12 de marzo, más de treinta organizaciones sociales, políticas y sindicales apoyaron con su firma la mo-

vilización y su manifiesto, entre ellas las AAVV de Venecia, La Paz, Las Fuentes y La Madalena. A buen seguro, de haber contado con más posibilidades de explicar lo que las instituciones ocultan, hubiéramos contado todavía con más apoyos.

El encierro en Interfacultades finalizó tras una intensa labor de información y denuncia, y de forzar al rectorado a acceder a algunas de nuestras reivindicaciones básicas: un debate abierto con el rector, un referéndum (aunque no vinculante) a los alumnos de la Universidad, y el compromiso del equipo rectoral de elaborar un escrito en el que se solicite a la DGA (la que tiene competencias sobre ello) que el precio del crédito de los máster sea el mismo que el de los grados, para que éstos no supongan una selección económica elitista.

Pero la batalla contra Bolonia no acaba con el encierro: la Asamblea sigue viva, activa y dando cada vez más forma a un movimiento estudiantil crítico que defiende en la medida de sus posibilidades una Universidad Pública de tod@s y para tod@s.